



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, dos (02) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Demandante: JAIME CELIS SALDARRIAGA
Demandada: ALIMENTOS LAM S. A. S.
Llamados en Garantía GUILLERMO HERNANDO GUERRERO QUIJANO y
DORIS MARLENE CHAMORRO NAVARRO
Radicado: 05360 31 05 0001 2019 00116 01
Sentencia: S-013

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a dar trámite al grado jurisdiccional de CONSULTA en el que se conoce del proceso, con ocasión de la sentencia absolutoria de primera instancia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí el 08 de noviembre de 2021.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES:

JAIME CELIS SAALDARRIAGA demandó a la sociedad denominada ALIMENTOS LAM S. A. S., para que una vez se declare la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido vigente entre el 1º de septiembre de 2013 y el 24 de febrero de 2017, sea condenada al pago de las prestaciones sociales causadas durante toda la relación

laboral. Pretende además el pago de los aportes al sistema de pensiones, así como la indemnización moratoria por falta de pago de las prestaciones sociales y las agencias en derecho.

LOS HECHOS:

Expone como fundamento de sus peticiones, que el 1º de septiembre de 2013 comenzó a laborar al servicio de la sociedad demandada mediante un contrato de prestación de servicios, desempeñando el oficio de transportador de la empresa de alimentos, hasta el 24 de febrero de 2017. Que el objeto del contrato era exclusivamente la carga y entrega de productos elaborados por la empresa demandada a sus clientes dentro y fuera del área metropolitana; que luego de un tiempo le empezaron a exigir el cumplimiento de funciones, entre las que estaban las de recoger insumos para la empresa y ocasionalmente hacer diligencias personales y bancarias de los empleados. Que el pago convenido por la labor realizada ascendía a la suma de \$120.000 por cada día laborado, para un total mensual de \$2.400.000. Que durante el tiempo que prestó servicios para la demandada debía cumplir horario, iniciando labores a las 7:00 a. m., hora en la cual debía empezar a repartir productos y al terminar esta labor debía regresar a la empresa a realizar otras actividades diferentes a las contratadas, con lo que se evidencia la subordinación ante la demandada. Que el 24 de febrero de 2017 la empresa decidió terminar el contrato sin que mediara justa causa para ello. Por último, indica que la demandada nunca le pagó las prestaciones sociales derivadas del contrato de trabajo, ni los aportes a la seguridad social.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, ALIMENTOS LAM S. A. S. indica que ésta fue constituida en el año 1995 por los señores GUILLERMO HERNANDO GUERRERO y DORIS MARLENE CHAMORRO. Que el 01 de marzo de 2016 fue adquirida por la sociedad Restrepo Pérez & Cía Restrez S. A. S. y que

por esta razón desconocen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se celebró el contrato o cualquier otro negocio jurídico entre la empresa y el demandante, pero que con el fin de brindar respuesta a la demanda se consultó el archivo de la empresa, así como al personal que viene laborando hace años. Se indica entonces que no les consta la fecha de inicio de las labores del demandante en la empresa pues no se encontró contrato de prestación de servicios suscrito entre con él; frente a la fecha de terminación indica que, si es cierta, resaltando que se trató de un contrato de transporte de mercancía. Que el demandante no estaba sujeto al cumplimiento de funciones diferentes al objeto del contrato cual era el transporte de mercancía de la empresa, que tampoco es cierto que debía cumplir un horario determinado, que la labor de transporte de mercancía la desarrollaba aquel de manera autónoma e independiente, que esto lo hacía por su propia cuenta y riesgo y con sus propios medios. Se opuso a las pretensiones de la demanda y en su defensa propuso las excepciones que denominó: Inexistencia de la obligación, Prescripción y la de Integración del contradictorio.

La demandada igualmente presentó escrito de llamamiento en garantía de los señores GUILLERMO HERNANDO GUERRERO QUIJANO y DORIS MARLENE CHAMORRO NARVÁEZ. La juez de conocimiento admitió este llamamiento a través de auto interlocutorio No. 436 del 31 de julio del año 2019, quienes fueron debidamente notificados y así consta a folios 287 del archivo 01 del expediente digital. Posteriormente estos llamados en garantía presentaron respuesta a la demanda, oportunidad en la cual negaron los hechos de la demanda, pues la única función que desarrolló el demandante se limitaba al transporte de mercancía de la empresa, pero que esto lo hacía de manera autónoma e independiente, en un vehículo de su propiedad y sin cumplimiento de horario. Igualmente se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y en su defensa propuso las excepciones de mérito que denominó: Improcedencia del llamamiento en garantía, Ausencia de vicios ocultos y la de Prescripción.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Mediante sentencia del 8 de noviembre de 2021, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí DECLARÓ probada la excepción de inexistencia de la obligación formulada por ALIMENTOS LAM S. A. S. y ABSOLVIÓ tanto a la sociedad como a los llamados en garantía de las pretensiones formuladas en su contra por el demandante, a quien CONDENÓ en costas, fijando como agencias en derecho el equivalente a un SMLMV a favor de la sociedad demandada.

Conoce la Sala del asunto por CONSULTA a favor del demandante.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En el término del traslado para alegar, la parte demandante presenta escrito de alegaciones de conclusión, oportunidad en la cual solicita sea revisada la totalidad de la prueba aportada al proceso y revocar la sentencia emitida por la Juez de primera instancia, pues en su sentir, el contrato desarrollado por el demandante con la sociedad demandada era un verdadero contrato de trabajo el cual quiso la empresa disfrazar bajo un contrato de prestación de servicios.

La sociedad ALIMENTOS LAM S. A. S. igualmente presenta alegatos de conclusión, oportunidad en la cual solicita sea confirmada en su totalidad la sentencia emitida por la Juez de primera instancia

CONSIDERACIONES:

Bien se sabe que de conformidad con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, para que exista contrato de trabajo se requiere que concurren tres elementos esenciales: a) la actividad personal del trabajador, esto es, realizada por sí mismo, b) la continuada dependencia o subordinación del trabajador con respecto al empleador, y c) un salario como retribución del servicio.

El segundo de los elementos enunciados, esto es, la continuada dependencia o subordinación, es el que determina la diferencia entre el contrato de trabajo y otras formas de contratación jurídica, en las cuales, por darse una relación igualitaria o no subordinada entre los sujetos de la relación contractual, no se causan, como en aquél, prestaciones sociales.

La norma últimamente citada describe tal dependencia o subordinación jurídica como la facultad que tiene el empleador para exigirle al trabajador el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, y la correlativa obligación de este de acatar dichas órdenes o reglamentos. Como facultad que es, no es necesario que el empleador de hecho la ejerza en todo momento, pues basta la potestad de poder usarla en cualquier tiempo.

De otro lado, el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que: *Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo.* La noción de **"relación de trabajo"** se caracteriza por la prestación personal de un servicio, de manera que, una vez demostrado este hecho, se presume la existencia del contrato de trabajo. Lo anterior representa una ventaja probatoria para el pretendido trabajador, en tanto no le incumbe preocuparse por demostrar la subordinación jurídico laboral, ya que la existencia de ésta, por hallarse inserta de la noción del contrato de trabajo, también está afianzada dentro de la misma presunción.

Naturalmente, se trata de una presunción legal o *iuris tantum*, que como tal puede ser desvirtuada mediante libre prueba en contrario, esto es, le concierne a la parte opositora derrocar la presunción, acreditando que, por el contrario, la relación contractual estuvo marcada por un vínculo independiente y un comportamiento autónomo del prestador del servicio, ejecutado en un rango de igualdad jurídica, sin sujeción alguna a la facultad dispositiva de la

energía de trabajo por parte del beneficiario del servicio que caracteriza el nexo laboral subordinado.

Lo anterior, que en teoría puede ser fácilmente discernible, no siempre lo es en la práctica, dada la existencia de no pocas situaciones que se hallan en las denominadas “zonas grises”, o lo que los doctrinantes españoles describen como el “ángulo de la duda”, cuyo deslinde es necesario efectuar a partir del examen **conjunto** de las circunstancias que envolvieron la relación, examinada de manera contextualizada, en contraste con lo que significaría el examen individualizado de una prueba determinada. Es lo que la jurisprudencia nacional ha descrito como la necesidad, en orden a esclarecer la subordinación, de “... analizar el conjunto de factores determinantes del núcleo de la vinculación laboral, y no aisladamente alguno de sus elementos, porque es precisamente ese contexto el que permite detectar tanto la real voluntad de los contratantes como la primacía de la realidad sobre las formalidades” (Sent. de mayo 4 de 2001, rad. 15.678).

Como pauta interpretativa y con este fin, también la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia dijo al respecto, en sentencia con Rad. 34223 de 2010, citada recientemente en la N° 47.044 del 15 de febrero de 2017, lo siguiente:

“Para la Corte es claro que si el Tribunal tuvo por probado que el actor le trabajó a la demandada, no tenía por qué verificar si esa actividad laboral se hizo bajo subordinación laboral, pues ese hecho debió considerarlo debidamente acreditado por razón de la presunción consagrada en la norma legal que infringió directamente. Toda vez que esa presunción es de naturaleza legal y, por lo tanto, susceptible de ser desvirtuada, ha debido entonces el fallador indagar si la presunción se desvirtuó por la parte demandada, acreditando que los servicios se prestaron de manera independiente, esto es, su labor de análisis de las pruebas se debió orientar a encontrar la autonomía en la prestación de los servicios, mas no la subordinación, que, en principio, estaba acreditada por ministerio de la ley.”

Planteado así el pleito, incumbía al demandante la carga de probar sus aseveraciones de manera que pueda el juez arribar a la conclusión certera acerca de la existencia del contrato de trabajo, para lo cual sería suficiente la demostración, al menos, de la relación laboral que se caracteriza por la prestación personal de un servicio, para que en virtud de lo normado en el artículo 24 del C. S. del Trabajo, se presuma la existencia del nexo laboral subordinado, trasladándose la carga de desvirtuar la presunción a la parte opositora.

En el caso bajo examen, a juicio de esta Sala la relación de trabajo personal está suficientemente demostrada con base en las pruebas del proceso, pues ninguna duda surge en cuanto que el Sr. CELIS SALDARRIAGA prestó sus servicios personales como transportador de mercancía que la empresa le asignaba, pues es un hecho aceptado por la propia demandada, frente a quien corresponde analizar si logra o no desvirtuar la presunción de subordinación laboral.

1.- Desde el punto de vista de las formas, las partes aportaron facturas de venta elaboradas por el actor con las que realizaba el cobro por los servicios de transporte prestados a la sociedad, en las cuales se establecían los días y el valor adeudado, facturas de las que, valga la pena indicar, se encuentran atadas a los asuntos de carácter netamente comerciales.

2.- El demandante en interrogatorio indicó que la relación que estableció con la sociedad demandada inició bajo la modalidad de un contrato de prestación de servicios, que todos los días debía acudir a las instalaciones de la compañía a las 7:00 a. m., pues era ese el lugar en el que recogía la mercancía que debía repartir y que en la tarde debía entregar las facturas de los productos que entregara y que por ello le pagaban la suma de \$120.000 por día. Indicó también que para la prestación del servicio se requería del medio de transporte lo cual hacía en un vehículo de su propiedad, que por este vehículo no le pagaban ninguna otra suma adicional de dinero, que era él quien

asumía los gastos como gasolina, SOAT, seguros, además de los permisos requeridos para poder transportar alimentos. Indicó también que para que la empresa le realizara el pago por los servicios prestados, debía presentar cuentas de cobro, pues de lo contrario no le realizaban el pago.

Se recibió igualmente el interrogatorio de parte a la representante legal de la sociedad demandada quien, pese a que no conoció al demandante desde que inició a prestar sus servicios en la compañía, fue clara en manifestar que cuando recibió el cargo le dieron información detallada de las labores que desempeñaba el actor y que esto siguió así hasta que decidieron prescindir de sus servicios. Manifestó igualmente que el demandante no estaba sujeto a órdenes ni a horarios, y que por sus servicios se le pagaban honorarios.

3.- De la prueba testimonial se destaca, en síntesis, lo siguiente:

El primero de ellos, Sr. ERNESTO GÓMEZ OCHOA, vendedor de la compañía demandada entre los años 2013 y 2014, indica que conoció al demandante porque fue transportador de ALIMENTOS LAM S. A. S. Inicialmente indicó que éste si estaba sujeto al cumplimiento de horarios, pero después dijo no saberlo. Señaló además que veía al actor todos los días a las 7:00 a. m. en las afueras de la compañía, que a esa hora llegaba y procedía a cargar la mercancía que era dispuesta por la demandada para su entrega. Que esta labor la hacía en un vehículo de propiedad del actor y que por esto no le hacían pagos adicionales.

SEBASTIÁN MENESES HERNÁNDEZ, empleado de la empresa, conoció al demandante como transportador de mercancía de la compañía, que tal labor la hacía en un carro de propiedad del actor al cual no se le observaban logos de la empresa, sin embargo, no brinda detalles de la relación contractual que tuvo el actor con la sociedad demandada.

La Sra. JOHANA MARÍA RAMÍREZ MARTÍNEZ informa que laboró al servicio de la sociedad demandada en el cargo de contadora durante el año 2017. Manifestó que conoció al demandante en razón a que este prestaba servicios de transporte a la sociedad demandada, que para esto debía contar con un vehículo que era de su propiedad, que para el pago de los servicios debía presentar cuentas de cobro y que tal pago se hacía cada 8 días. Advirtió que el demandante solo prestaba servicios de transporte. Que en algunas oportunidades le llegó a solicitar al demandante que le realizara algunas gestiones de bancos o para que le entregara mercancía a otros vendedores, pero que esto no eran propiamente órdenes sino que tales solicitudes se hacían como “favores”, pero que si el actor no podía por alguna circunstancia, simplemente acudía a otra persona sin que aquel fuera objeto de sanciones o acciones disciplinarias por ello, pues no era un empleado de la compañía sino un contratista. Por último, adujo que el actor no cumplía horario, aunque en algunas oportunidades si debía coordinar con el área de bodega de la compañía ciertas entregas porque la compañía tenía unos clientes que recibían mercancía solo a través de asignación de citas.

Hasta acá el recuento probatorio del contexto de la relación contractual entre las partes. Corresponde ahora concluir, a tono con lo que se viene de ver, que, a juicio de esta Sala de Decisión, la empresa logra desvirtuar la subordinación pues los actos y conductas señaladas, no son exclusivas del contrato de trabajo, y, por el contrario, bien pueden estar presente en otra clase de relación contractual de diverso orden, especialmente la comercial, y es que no por el hecho de que en algunas ocasiones necesariamente se debían coordinar turnos para la entrega de la mercancía con el fin de lograr desarrollar el objeto de la Empresa, se desnaturaliza el contrato de prestación de servicios que en este caso celebraron las partes, el cual no sufrió modificaciones pese al cambio de dueños.

En la sentencia SL3842, del 25 de marzo de 2015, Radicado 45484, estudió la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia un evento de contornos similares al presente, aunque en ese caso se analizó la validez de un contrato de agencia comercial, pero con características muy parecidas al presente caso, como pasa a transcribirse. Dijo la Corte: *“Tales condiciones contractuales, de rendir informes de mercado o sujetarse a unas precisas instrucciones y directrices, como bien lo dedujo el Tribunal, son absolutamente normales o esenciales en el desarrollo de un contrato de agencia comercial como el que aquí se analiza, pues no tienden a promover la prestación de un servicio personal en condiciones subordinadas, sino que velan por la adecuada distribución de los productos, el conocimiento y análisis de las condiciones del mercado, y, con ello, la defensa de los intereses, marcas, productos e imagen del empresario. (...)”*

Así mismo, en la sentencia SL9801, del 29 de julio de 2015, radicado 44519, indicó la Corte: *“...esta Sala ha sido del criterio jurídico de que la vigilancia, el control y la supervisión que el contratante de un convenio comercial o civil realiza sobre la ejecución y las obligaciones derivadas de tal relación, en ningún caso es equiparable a los conceptos de subordinación y dependencia propios del contrato de trabajo, pues estas últimas son de naturaleza distinta de aquellos.”*

Y, en sentencia 79216 del 25 de septiembre de 2016, se dijo: *“Ahora, el contrato de prestación de servicios, que puede revestir diferentes denominaciones, se caracteriza por la independencia o autonomía que tiene el contratista para ejecutar la labor convenida con el contratante, lo que lo exime de recibir órdenes para el desarrollo de sus actividades; no obstante, este tipo de vinculación no está vedado de una adecuada coordinación en la que se puedan fijar horarios, solicitar informes e incluso establecer medidas de supervisión o vigilancia sobre esas mismas obligaciones. Lo importante es que dichas acciones no desborden su finalidad a punto de convertir tal coordinación, en la subordinación propia del contrato de trabajo.”*

La subordinación, no sobra recordarlo, se entiende como la facultad que le asiste a un empleador para exigirle al trabajador el cumplimiento de órdenes e instrucciones de trabajo, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo, calidad o cantidad de trabajo, imponerle reglamentos y directrices, o ejercer un poder disciplinario y sancionatorio, lo cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato, y la correlativa obligación del trabajador en acatar tales disposiciones.

La Corte Constitucional, a su vez, en sentencia C-934 de 2004, al respecto señaló: *“Dentro del elemento subordinación se destaca, como ya lo ha sostenido la jurisprudencia, el poder de dirección en la actividad laboral y la potestad disciplinaria que el empleador ejerce sobre sus trabajadores para mantener el orden y la disciplina en su empresa. Esa facultad, como es obvio, se predica solamente respecto de la actividad laboral y gira en torno a los efectos propios de esa relación laboral.”*

En el caso en cuestión, si bien se acreditó la prestación personal del servicio para el cual fue contratado el demandante, se infiere que esa labor de entrega de la mercancía que la empresa le asignaba se realizaba de manera autónoma e independiente, para la cual se valía del uso de un vehículo de su propiedad, siendo el mismo demandante quien se encargaba de contar con los permisos que la ley exige para transportar alimentos, además de asumir los gastos propios tales el SOAT, la revisión tecnomecánica, el pago de impuestos, gasolina y mantenimiento en general, sin que por esto recibiera remuneración adicional, y en general cumplía con todos las condiciones para prestar un servicio comercial de transporte, el cual, para poder su cancelación, debía el demandante elaborar de manera semanal las factoras por los servicios prestados según los proyectos y rutas realizadas, situación que no cambió durante toda la relación pese al

cambio de dueños que tuvo la empresa, y así quedó consignado en el interrogatorio de parte absuelto por el propio demandante.

Ahora, si bien el demandante ocasionalmente realizaba otras labores distintas al transporte de la mercancía de la empresa, lo cierto es que no se arrimó prueba de que tales funciones forzosamente tuvieran que ser cubiertas por el demandante, más bien los testigos dan cuenta de que en caso de que no pudieran ser llevadas a cabo por el demandante, simplemente se acudía a otra persona sin que por ello se hicieran llamados de atención, pues tampoco se observó que la empresa ejerciera ningún poder disciplinario o sancionatorio frente al contratista por la negación del cumplimiento de las diligencias de que se habla.

Así las cosas, examinado el acervo probatorio y de conformidad con las peculiaridades propias de la relación en cuestión, no se está en presencia de un vínculo laboral subordinado, sino de una relación libre e independiente, regida bajo un contrato de prestación de servicios, por lo que la decisión de primera instancia deberá ser confirmada.

Sin costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí, el día 08 de noviembre de 2021.

Sin costas en esta instancia.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **1c50c8267e93331e9c99a8207ef5b6bb924fdd0413e3fcd9a818675e71ea2536**

Documento generado en 02/02/2023 02:58:13 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>